

# Asedio a un campo sin puertas

El pasado año 2009 se registraron en España 11823 tractores. La menor cifra de mercado desde que hace 55 años se iniciara la mecanización agraria en nuestro país. Esta reducción de ventas ha afectado también a otros equipos agrícolas, como aperos para laboreo, implementos para tratamiento de forraje, o máquinas de recolección. Las razones para este fuerte deterioro de la demanda tienen un punto de coincidencia: la disminución de los ingresos de los agricultores y, como consecuencia, su menor capacidad de compra.

A lo largo de los últimos años la presión de las grandes cadenas de distribución para incrementar sus márgenes ha reducido progresivamente los precios de los productos de los agricultores, de los ganaderos y de las empresas agroalimentarias. La actual crisis, y la menor demanda de alimentos por parte del mercado, han sido aprovechadas por las empresas comercializadoras para someter aún más los precios en origen que, en muchos productos, han quedado por debajo de los costes de producción.

La capacidad de los agricultores para incidir en los elementos que intervienen en el proceso de comercialización, o en los medios, es bastante reducida. El Sector Agrario cuenta con 900 000 efectivos. Una cifra que tan sólo representa el 4% de la Población Activa. A fin de cuentas un número escaso de votantes diseminados por zonas rurales, con un 60% de ellos viviendo en pueblos de menos de 500 habitantes. Unos municipios con escasa incidencia en el panorama social y con un futuro muy comprometido. Y de la distancia al olvido sólo hay un paso.

Los agricultores tampoco lo tienen fácil para incidir en el mercado y transmitir sus carencias. En las grandes ciudades, muchos de sus habitantes viven de espaldas al campo. A pesar de su ascendencia rural, buena parte de los ciudadanos urbanos tienen un escaso contacto con la agricultura y un conocimiento nulo o muy básico de los actuales sistemas de producción agraria. Más aún, los datos y noticias que les llegan sobre el tema agrario a través de los medios de comunicación son, a menudo, sesgados o de gran superficialidad.

Sin embargo, el español medio considera –orgullosamente– que los alimentos producidos en nuestro país tienen una alta calidad y variedad, y se ofrecen a un precio asequible. La contradicción de muchos de estos consumidores entre el aprecio por la comida local y la desconsideración por sus productores no existe en el resto de Europa, por lo que a veces los agricultores y ganaderos de nuestro país se quejan de que son peor tratados que sus compañeros europeos, tanto por nuestros conciudadanos como por nuestras autoridades. Y puede que tengan razón.

Cuanto mayor es el desarrollo de un país, mayor es también su industria agroalimentaria. En Francia, Alemania o Reino Unido, este sector proporciona empleo a más del 15% de la población. En España, se parte de una situación similar. Pero la fuerza de esta industria radica en disponer de una agricultura y una ganadería competitivas y cualificadas. Así, el sector agroalimentario –uno de los grandes de la exportación de nuestro país– ha sido el único que durante 15 años ha presentado un balance positivo continuado en el comercio exterior, con una media anual de 3 500 millones € de diferencial favorable entre exportaciones e importaciones. Un resultado muy superior al que han ofrecido otros sectores de gran renombre y consideración, como por ejemplo el de automoción.

En estos últimos años, el sector agrario pasa por grandes cambios, como ocurre en otros sectores de la vida económica y social. Pero el principal problema de los agricultores y ganaderos españoles radica en la falta de orientación y confianza en cuanto a su función profesional en la sociedad productiva del futuro. La incógnita de las subvenciones, el incremento de las importaciones, los controles productivos..., estos y otros muchos interrogantes coartan su capacidad de decisión. Sin embargo, nuestro país precisa imprescindiblemente de agricultores y ganaderos competitivos, capaces de producir alimentos de calidad a buen precio.

La principal función del campo debe ser productiva y de aprovechamiento económico, más que de puro mantenimiento del ecosistema para contemplación de los residentes urbanos. Y el trabajo de los agricultores y ganaderos debe seguir las normas lógicas de una acción sostenible, porque a los productores les va en ello su futuro. Nuestro país no puede permitirse el abandono continuo de las zonas rurales por parte de los jóvenes pues, actualmente, la edad media de los agricultores supera los 55 años. Se impone actuar siguiendo los objetivos de 1957 en los Tratados de Roma, en el nacimiento de la Comunidad Europea: garantizar el abastecimiento de los alimentos a precios razonables, fijar la población rural mediante un nivel de vida digno, proporcionar estabilidad a los mercados, fomentar el progreso técnico... La Unión Europea y los Ministerios de Agricultura de los distintos países son conscientes de la importancia del sector. En España, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, con apenas competencias y un escaso número de funcionarios dedicado al tema agrario, debería coordinar con las Consejerías de las Autonomías la recuperación del campo y las zonas rurales. Pero, a tenor de los intereses encontrados observados en los últimos años, no parece que ello sea posible.

Que Dios nos asista. ■

Eloy Galván